

La década socialista en España

Alberto Miguez

No obstante los síntomas de desgaste que comienza a presentar —por la coyuntura recesiva de la economía europea, por los escándalos de corrupción de la burocracia partidista— el balance de los diez años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español es altamente favorable: superación de las dificultades económicas derivadas del gobierno Suárez, manejo equilibrado de las demandas descentralistas (e independentistas) de las Comunidades Autónomas, ingresos a la Comunidad Europea y a la OTAN que acabaron con el aislamiento internacional de España, compromiso a fondo con la reconversión industrial, aumento sostenido del crecimiento económico, extensión de la seguridad social al 99 por ciento de la población, etcétera¹.

* * *

La década socialista en España

El 28 DE OCTUBRE DE 1982 los españoles, convocados a votar con anticipación, otorgaron la mayoría de votos al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta formación nació a mediados del siglo pasado pero había abandonado progresivamente su radicalismo político para acoger, al menos en el seno de su dirección, los principios de la socialdemocracia. El partido socialista encabezado por Felipe González obtuvo, en ese momento, 48% de los sufragios y más de 10 millones de votos. Algunas semanas más tarde comenzaría una de las experiencias más interesantes, más originales y más polémicas que la escena política española —y también europea— haya conocido en estos últimos años.

Diez años han pasado desde que esos jóvenes nacionalistas (como los apodaba la prensa anglosajona) llegaron al gobierno y tomaron el poder. Este aniversario coincidió con lo que la publicidad denominó el año de España (Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla, Quinto Centenario del Descubrimiento de América, etcétera). Conviene por esto realizar un balance de este decenio y de los resultados obtenidos.

Reseñemos, ante todo dos hechos que siempre que hacemos referencia a este periodo lo han disimulado o eludido: por una parte la llegada al poder del PSOE, en una época de inestabilidad democrática marcada por el intento de golpe militar del 13 de febrero de 1981 y, por la otra parte, la ruina de la Unión de Centro Democrático (UCD) —la coalición de centro-derecha

I TRIMESTRE 1993

que había logrado con su líder, Adolfo Suárez, a partir de 1976, la transición pacífica de la dictadura a la democracia.

Gracias al liderazgo del rey Juan Carlos, la democracia española había reencontrado, entre febrero de 1981 y octubre de 1982, fuerza y prestigio. Durante este periodo se llevó a cabo la disolución de la UCD que impulsó a los socialistas al escenario: el epigono de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, reveló, durante su breve mandato a la cabeza del gobierno, una notable incapacidad para dirigir convenientemente su propio partido y para reglamentar los asuntos corrientes, lo cual terminó por provocar la anticipación de las elecciones legislativas que el PSOE ganó sin sorpresas.

Una pesada herencia

TANTO AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR, el PSOE debió afrontar dificultades de envergadura. La situación económica y social se había desmejorado considerablemente durante los años de transición democrática: consagrado de cuerpo y alma al delicado desmantelamiento de la dictadura y a la invención de una democracia, Adolfo Suárez no había escuchado los gritos de alarma de sus colaboradores (sobre todo los de su vicepresidente, el economista Fuentes Quintana). Resultado: el desempleo y la inflación se desmandaron. Además se enfrentaban al espinoso problema de las nacionalidades y de las "regiones" en las cuales las reivindicaciones por autonomía aumentaban en la medida en que las libertades se convertían en una realidad. En cuanto al azote terrorista, se mantuvo. Finalmente, la "amenaza militar",

se realiza el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN — referéndum que el gobierno lleva a cabo con justicia.

Aunque durante los últimos treinta años la economía española fue una de las más dinámicas del mundo (el PIB casi se cuadruplica después de 1960), a fines de 1982 los socialistas se enfrentaron a una situación delicada, fruto de la larga crisis sembrada en 1975, después del primer choque petrolero. A partir de esta fecha y durante once años, la media del crecimiento anual descendió a 1.5% y el desempleo pasó de 2.6% en 1974 a 21.7 en 1985. Si la recesión golpeó a todos los países occidentales en España fue más larga y se sintió más profundamente. Entre 1975 (año de la muerte del dictador Francisco Franco) y 1978 las inquietudes políticas concernientes al futuro del país obstaculizaron toda terapia orientada a acabar con la crisis. Los gobiernos de la UCD se dedicaron a luchar contra la tempestad y a aliviar las crecientes presiones sociales por medio de concesiones salariales que hicieron elevar la tasa de inflación al 23.7% en 1977. A partir de 1979 las fuerzas políticas democráticas intentaron lograr un acuerdo entre todos los actores sociales por medio de la firma del "Pacto de la Moncloa"^{1A}. Parece ser que la más significativa de estas medidas fue la negociación de contratos colectivos entre la empresa y los trabajadores sobre la base de la tasa de inflación prevista y no sobre la del año en curso. Los "Pactos" preveían también reformas al sistema fiscal y financiero, a las relaciones de trabajo en la empresa pública y una serie de reconversiones en los asuntos de la energía y de la industria. Pero estos no dieron los resultados esperados: la segunda crisis petrolera y la crisis de la UCD los hicieron fracasar.

El costo de la reconversión fue muy elevado pues se compensó con mayor generosidad que en Francia la supresión de cada empleo. Pero no se adelantó una reforma profunda de la empresa pública industrial, limitándose a suspender los procesos de privatización de las mismas en el momento en que ellas encontrarán dificultades. En el campo de la energía, se lleva a cabo una nueva política fundamentada en dos ejes: la economía de energía y la "moratoria" nuclear (no se construyen ni se ponen al servicio más centrales).

A finales de 1985, la política de austeridad y de saneamiento comienza a ser fructífera: la inflación baja 6 puntos y se estabiliza alrededor del 8.2%. Pero el costo social se mantiene y el desempleo no deja de aumentar. Termina por afectar al 21.7% de la población —un verdadero récord en Europa.

La entrada de España en la CE se hace en condiciones favorables y las consecuencias resultan positivas. Entre 1986 y 1990 la tasa anual de crecimiento del PIB fue, en promedio, de 4.5% y por habitante de 4.3%, tras pasando así el promedio de los Doce (3.1%).

Durante este periodo, registramos una muy apreciable reactivación de las inversiones con un promedio de 12.2%. La estabilidad política asegurada por el partido en el poder (que, en 1989, ganó las elecciones legislativas, por tercera vez consecutiva, con mayoría absoluta), la relativa paz social, el mantenimiento de los costos de producción y la rentabilidad de los capitales, ofrecieron condiciones de seguridad para los inversionistas extranjeros y nacionales. Un ejemplo: en 1990 las inversiones representaban prácticamente un cuarto del PIB. La creación de empleos fue facilitada y la productividad reforzada: entre 1986 y 1990 se crearon 2 millones de empleos y la tasa de desempleo descendió de 21.7% a 16%; sin embargo, todavía se mantiene como una de las más elevadas de la CE.

Los expertos aseguran que a partir de 1986 comenzó en España el proceso de "internacionalización" de la economía gracias a la rapidez en el crecimiento de la inversión extranjera, concentrada en los sectores inmobiliario, financiero, automotriz, alimentario y de la industria química. Mientras se desarrollaba esta ola de prosperidad, el gobierno decidió tomar una serie de medidas de carácter social para satisfacer a un electorado que había cambiado su estructura y su origen: extendió las prestaciones de seguridad social al 99% de la población, concedió pensiones mínimas a aquellos que nunca habían cotizado durante su actividad e invirtió masivamente en la educación y en las infraestructuras de transporte. El deterioro de las relaciones entre el gobierno y los sindicatos mayoritarios (Unión General de Trabajadores, socialista, y Comisiones Obreras, comunista) era inevitable. Este deterioro culmina con la ruptura de la concertación social. Los violentos choques condujeron al paro general del 14 de diciembre de 1988, muy conocido en todos los países.

A partir de 1991, la nueva recesión mundial afecta a España y termina con el crecimiento espectacular que había caracterizado el quinquenio precedente. No obstante una progresión del PIB, superior en 1991 al promedio de la Comunidad (2.4% contra 1.3%), se registran una serie de resultados económicos inquietantes: el déficit público aumenta, la inflación no pudo ser reducida (6.3% anual) y el desempleo progresa (17%).

EL AÑO 1992 SE ANUNCIABA, para España, como un año emblemático: imagen exterior, gastos suntuarios e inversiones en infraestructura. De hecho, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la construcción del primer tren español de alta velocidad (AVE) entre Sevilla y Madrid representaron, para el tesoro público, un gran desembolso. Los beneficios esperados por el gobierno de estos tres eventos estuvieron por debajo de lo logrado, no obstante la gran afluencia de visitantes y de turistas. El déficit desmesurado generado por estos gastos no pudo ser satisfecho.

"La fiesta española" tuvo costos tan elevados que el país ha perdido terreno en el proceso de "convergencia" y de competitividad respecto a las economías de los países comunitarios más avanzados. A mediados de julio del 92, el jefe de gobierno reconoció que la situación económica era delicada y puso fin al tono de triunfalismo generalizado que había caracterizado, hasta ahora, los discursos oficiales.

Felipe González ha mostrado tradicionalmente un optimismo desmesurado. Para darse cuenta de ello basta comparar sus estimaciones con la realidad cotidiana que un comentarista, experto en cuestiones económicas, analiza de la siguiente manera: "Con respecto a la CE, la inflación es inferior en 3 puntos, pero puede llegar al 6.5% para fines de año. Desde hace seis meses, el crecimiento económico disminuye (solamente 2.5% respecto al 5% previsto) y podría no ser sino del 1% para finales del año. En el primer trimestre de 1992, 110.000 empleos se perdieron mientras que contábamos con ganar 290.000. El desempleo toca al 17.5% de la población activa; es la tasa más elevada en Europa. La pérdida de competitividad, con un déficit de 1.600 millones de pesetas en las cuentas corrientes, no hace sino agravar la situación. En efecto, la peseta sobreestimada aumenta el precio de las exportaciones y del turismo pero baja el de las importaciones. Las tasas de interés son dos veces más elevadas que las de los europeos en general y el Banco de España atesora 72.000 millones de dólares, es decir casi el 12% del PIB —más del doble de lo que se estima como normal—. Los gastos públicos han engendrado un déficit de 1.100 millones de pesetas, 4.4% del PIB respecto al 3% previsto en el Programa de Convergencia con Europa. El Estado no tiene un peso y, lo que es peor, no tiene más imaginación para obtenerlo si no es aumentando los impuestos"². Y esa fue precisamente la medida adoptada por el gobierno a finales de julio pasado: se aumentan los impuestos y el IVA que pasa de 12 a 15% en medio de las protestas de los actores sociales (patronales y sindicatos), de las críticas de la oposición y del "descontento" de la opinión pública. Hoy los españoles sienten que el decenio socialista acabó mal.

Desde luego, durante el siglo XX, ningún gobierno tuvo una mejor imagen exterior que el gobierno socialista. Diversos factores históricos contribuyeron a ello: el pasado dictatorial y los balbuceos de la democracia en

²/ Luis Ignacio Parada, ABC, 16 de julio de 1992.

los años 70. Pero igualmente se pudo apreciar la prudencia de Felipe González y de sus colaboradores que accedieron al poder decididos a "operar" un cambio en profundidad y que se contentaron como se dice humorísticamente, con "no cambiar sino ellos mismos".

Así pues, la política económica neoliberal practicada hasta aquí no registró ninguna modificación. En cambio, se decidió aplicar medidas de privatización y de reconversión industrial que sólo fueron posibles gracias a la continuidad brindada por tres elecciones ganadas con mayoría absoluta.

En cuanto a la política exterior, no ha evolucionado. España se integró al medio ambiente europeo y atlántico llevando a cabo gestos simbólicos hacia América Latina y manteniendo una presencia permanente (e interesada) en Marruecos. La participación del país en foros internacionales se acentuó (celebración de la Conferencia de Paz sobre el Medio Oriente en noviembre de 1991) pero la cooperación para el desarrollo de los países africanos y latinoamericanos no se intensificó sino modestamente. De manera general, las grandes líneas de la diplomacia española siguen siendo iguales a las que había definido la UCD hacia mediados de los años 70.

La gestión de la administración del Estado tampoco fue modificada. Cuando el presidente español iba a ganar las elecciones de otoño en 1982, pronunció una frase que posteriormente le han recordado más de una vez: "Lo que yo espero es que España funcione". Esta promesa fue traicionada: la Administración española sigue siendo lenta, defectuosa y, en ciertos casos, corrupta. En la práctica, el modelo de *Estado autonómico* utilizado para descentralizar importantes sectores nacionales se ha revelado como oneroso.

Pero es en lo concerniente a la moral pública que se ha notado una transformación. La Administración española, central o regional, conservaba, aun bajo la dictadura, una reputación de integridad. Desde luego, durante estos 10 años, todo ha evolucionado de manera espectacular. Los escándalos causados por el tráfico de influencias, los delitos de iniciación, de estafa, y otros abusos, se han multiplicado. Sería por tanto injusto culpabilizar exclusivamente a los diferentes gobiernos socialistas: estos escándalos han explotado tanto en los gobiernos autonómicos como en las municipalidades administrativas de centro-derecha o en las comunistas. Pero es innegable que la falta de control parlamentario (desaparición inadmisible de la separación de los poderes legislativo y ejecutivo, descrédito de las grandes instituciones) y la implantación de un modelo de sociedad de consumo en donde solamente importa el beneficio económico han favorecido la *eleptocracia* (el gobierno de los ladrones). Este fenómeno no es, en verdad, típicamente español pero responde a sus propias e inquietantes características.

Uno de los marbetes del Partido Socialista Español durante sus campañas electorales era "cien años de honestidad". Hoy, esta frase no tiene sentido: nunca, desde hace sesenta años, la vida política del país ha estado tan manchada de inmoralidad y de deshonestidad.

La acusación más frecuente al gobierno socialista, en los últimos diez años, no solamente ha sido la de corrupción sino también la de abuso de poder y la del uso de métodos antidemocráticos en la gestión diaria de los asuntos de Estado. Esta acusación no está desprovista de fundamentos: el

triunfo del Partido Socialista, después de tres elecciones consecutivas, le ha dado un cierto aire de autoritarismo y de sectarismo parlamentario (porque la mayoría absoluta dificulta y bloquea todo debate desfavorable al gobierno). El poder ha intentado amordazar los medios de comunicación que se muestran críticos o no enteramente devotos a su causa, cosa que se constata claramente en el medio audiovisual en el cual una ley restrictiva y arbitraria le concede privilegios a los *amigos* del poder. Todas las cadenas son deficitarias, tanto las nacionales como las regionales. Después del reciente cambio de los accionarios en la única cadena de televisión que se permitía ligeramente criticar al gobierno (Antena 3), el poder Ejecutivo pudo reencontrar la calma: los programas informativos y los debates de todas las cadenas del país son neutros o totalmente favorables a sus acciones y la adulación tiene el mismo tono que bajo la dictadura de Franco. Estos son los comportamientos que los sociólogos han clasificado como "franquismo residual".

La sucesión imposible

EL PARTIDO SOCIALISTA SE HA CONVERTIDO en una máquina bien lubricada. La ideología socialdemócrata se diluyó en el pragmatismo que aparece como ideal a los ojos de una opinión pública mal informada y poco participante (España tiene una de las tasas de abstención electoral más elevadas del mundo). La existencia de disidentes y de escisiones en el seno del PSOE no preocupan para nada al aparato del partido, controlado por la mano de hierro del vicesecretario (y ex vicepresidente del gobierno), Alfonso Guerra. Nadie pone en duda el liderazgo de Felipe González que, de tiempo en tiempo, anuncia con ambigüedad su intención de abandonar la actividad política, liberando así una verdadera *serpiente de mar* que sostiene durante algunos días la crónica de la enojosa vida política española. El actual presidente es, seguramente, un líder carismático que aprendió mucho en el curso de estos diez años y que, como lo repiten sus partidarios más incondicionales, "no tiene reemplazo". El cuenta con la habilidad de convencer a sus compatriotas de su capacidad y de su honestidad frente a la incompetencia y a la corrupción... de sus colaboradores "de segundo orden". Sin su figura sería muy difícil comprender el decenio socialista.

¿Pero cómo se explica la larga permanencia en el poder de Felipe González sin recordar la existencia de un grupo de centro-derecha disperso y algunas veces fragmentado? Desde 1976 la derecha española ha dependido de una personalidad controversial, salida del franquismo: Manuel Fraga Iribarne. Hoy recluso en su tierra natal (Galicia, de la cual es Presidente regional), él fue incapaz de construir en el momento requerido una alternativa de liderazgo para la derecha. Su sucesor, José María Aznar, el joven líder del Partido Popular (PP), principal partido de oposición, de centro-derecha, intentó en varias ocasiones constituir una plataforma unitaria de oposición al socialismo. Quiso asegurar el apoyo de los dos grandes partidos "nacionalistas" regionales del País Vasco Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de Cataluña, Convergencia y Unión (CIU). Pero ninguna de sus formaciones, más interesadas en obtener ventajas inmediatas que en facilitar la alternan-

los años 70. Pero igualmente se pudo apreciar la prudencia de Felipe González y de sus colaboradores que accedieron al poder decididos a "operar" un cambio en profundidad y que se contentaron como se dice humorísticamente, con "no cambiar sino ellos mismos".

Así pues, la política económica neoliberal practicada hasta aquí no registró ninguna modificación. En cambio, se decidió aplicar medidas de privatización y de reconversión industrial que sólo fueron posibles gracias a la continuidad brindada por tres elecciones ganadas con mayoría absoluta.

En cuanto a la política exterior, no ha evolucionado. España se integró al medio ambiente europeo y atlántico llevando a cabo gestos simbólicos hacia América Latina y manteniendo una presencia permanente (e interesada) en Marruecos. La participación del país en foros internacionales se acentuó (celebración de la Conferencia de Paz sobre el Medio Oriente en noviembre de 1991) pero la cooperación para el desarrollo de los países africanos y latinoamericanos no se intensificó sino modestamente. De manera general, las grandes líneas de la diplomacia española siguen siendo iguales a las que había definido la UCD hacia mediados de los años 70.

La gestión de la administración del Estado tampoco fue modificada. Cuando el presidente español iba a ganar las elecciones de otoño en 1982, pronunció una frase que posteriormente le han recordado más de una vez: "Lo que yo espero es que España funcione". Esta promesa fue traicionada: la Administración española sigue siendo lenta, defectuosa y, en ciertos casos, corrupta. En la práctica, el modelo de *Estado autonómico* utilizado para descentralizar importantes sectores nacionales se ha revelado como oneroso.

Pero es en lo concerniente a la moral pública que se ha notado una transformación. La Administración española, central o regional, conservaba, aun bajo la dictadura, una reputación de integridad. Desde luego, durante estos 10 años, todo ha evolucionado de manera espectacular. Los escándalos causados por el tráfico de influencias, los delitos de iniciación, de estafa, y otros abusos, se han multiplicado. Sería por tanto injusto culpabilizar exclusivamente a los diferentes gobiernos socialistas: estos escándalos han explotado tanto en los gobiernos autonómicos como en las municipalidades administrativas de centro-derecha o en las comunistas. Pero es innegable que la falta de control parlamentario (desaparición inadmisibles de la separación de los poderes legislativo y ejecutivo, descrédito de las grandes instituciones) y la implantación de un modelo de sociedad de consumo en donde solamente importa el beneficio económico han favorecido la *cleptocracia* (el gobierno de los ladrones). Este fenómeno no es, en verdad, típicamente español pero responde a sus propias e inquietantes características.

Uno de los marbetes del Partido Socialista Español durante sus campañas electorales era "cien años de honestidad". Hoy, esta frase no tiene sentido: nunca, desde hace sesenta años, la vida política del país ha estado tan manchada de inmoralidad y de deshonestidad.

La acusación más frecuente al gobierno socialista, en los últimos diez años, no solamente ha sido la de corrupción sino también la de abuso de poder y la del uso de métodos antidemocráticos en la gestión diaria de los asuntos de Estado. Esta acusación no está desprovista de fundamentos: el

triunfo del Partido Socialista, después de tres elecciones consecutivas, le ha dado un cierto aire de autoritarismo y de sectarismo parlamentario (porque la mayoría absoluta dificulta y bloquea todo debate desfavorable al gobierno). El poder ha intentado amordazar los medios de comunicación que se muestran críticos o no enteramente devotos a su causa, cosa que se constata claramente en el medio audiovisual en el cual una ley restrictiva y arbitraria le concede privilegios a los *amigos* del poder. Todas las cadenas son deficitarias, tanto las nacionales como las regionales. Después del reciente cambio de los accionarios en la única cadena de televisión que se permitía ligeramente criticar al gobierno (Antena 3), el poder Ejecutivo pudo reencontrar la calma: los programas informativos y los debates de todas las cadenas del país son neutros o totalmente favorables a sus acciones y la adulación tiene el mismo tono que bajo la dictadura de Franco. Estos son los comportamientos que los sociólogos han clasificado como "franquismo residual".

La sucesión imposible

EL PARTIDO SOCIALISTA SE HA CONVERTIDO en una máquina bien lubricada. La ideología socialdemócrata se diluyó en el pragmatismo que aparece como ideal a los ojos de una opinión pública mal informada y poco participante (España tiene una de las tasas de abstención electoral más elevadas del mundo). La existencia de disidentes y de escisiones en el seno del PSOE no preocupan para nada al aparato del partido, controlado por la mano de hierro del vicesecretario (y ex vicepresidente del gobierno), Alfonso Guerra. Nadie pone en duda el liderazgo de Felipe González que, de tiempo en tiempo, anuncia con ambigüedad su intención de abandonar la actividad política, liberando así una verdadera *serpiente de mar* que sostiene durante algunos días la crónica de la enojosa vida política española. El actual presidente es, seguramente, un líder carismático que aprendió mucho en el curso de estos diez años y que, como lo repiten sus partidarios más incondicionales, "no tiene reemplazo". El cuenta con la habilidad de convencer a sus compatriotas de su capacidad y de su honestidad frente a la incompetencia y a la corrupción... de sus colaboradores "de segundo orden". Sin su figura sería muy difícil comprender el decenio socialista.

¿Pero cómo se explica la larga permanencia en el poder de Felipe González sin recordar la existencia de un grupo de centro-derecha disperso y algunas veces fragmentado? Desde 1976 la derecha española ha dependido de una personalidad controversial, salida del franquismo: Manuel Fraga Iribarne. Hoy recluso en su tierra natal (Galicia, de la cual es Presidente regional), él fue incapaz de construir en el momento requerido una alternativa de liderazgo para la derecha. Su sucesor, José María Aznar, el joven líder del Partido Popular (PP), principal partido de oposición, de centro-derecha, intentó en varias ocasiones constituir una plataforma unitaria de oposición al socialismo. Quiso asegurar el apoyo de los dos grandes partidos "nacionalistas" regionales del País Vasco Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de Cataluña, Convergencia y Unión (CIU). Pero ninguna de sus formaciones, más interesadas en obtener ventajas inmediatas que en facilitar la alternan-

cia, parece dispuesta a entenderse con él. De otro lado, estos dos partidos regionales contrajeron una alianza con el Partido Socialista: el PNV pertenece, con los socialistas, al gobierno de coalición del País Vasco. En cuanto a CiU, apoya al gobierno en el Parlamento en la mayoría de los asuntos y parece estar a punto de participar en un gobierno de coalición en el plano nacional si, de acuerdo con las estadísticas, los socialistas no llegan a obtener la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Estas están previstas para octubre de 1993 y podrían ser anticipadas. El Partido Popular carece de esperanzas de traspasar su puntaje habitual (26% en las elecciones de 1982, 1986 y 1989). Los socialistas han perdido más de 2 millones de votos entre 1982 y 1989, y su imagen ha sido fuertemente deteriorada por la crisis económica y los problemas de corrupción en los cuales algunos de sus líderes han estado implicados. La oposición está convencida de que el momento del cambio ha llegado. Pero González y sus partidarios aseguran que los índices de adhesión y de popularidad que tienen siguen siendo satisfactorios y que obtendrán una vez más una "mayoría suficiente" para poder gobernar, por cuatro años más, el país*.

Parece terriblemente azaroso establecer un balance del decenio González, pues toda pintura en blanco y negro no puede ser sino inexacta. Lo que queda claro en todo caso es que después de un esfuerzo considerable para sobrellevar la grave situación en la cual se encontraba el país (1983-86), Felipe González y sus amigos pasaron de un *estado de gracia* a la edad de la razón. Ellos tuvieron, durante cinco años, un éxito verdadero en los asuntos socioeconómicos y lograron mejorar la imagen exterior del país (1986-91). Curiosamente la etapa del *desencantamiento* llegó en 1992, año en el cual los gobernantes y la opinión pública habían cimentado tanta esperanza.

Queda una certeza; los que asumirán, el año próximo, las riendas del poder, no tendrán una tarea fácil. La convergencia económica con los países de la Europa comunitaria, la competitividad, el levantamiento de la economía y la moralización de la vida pública constituirán objetivos ineludibles y difíciles de enfrentar para los próximos dirigentes de España.

* / Nota del Editor: las últimas encuestas conocidas, como la de la empresa Demoscopia, hecha para el diario El País en diciembre de 1992, señala una diferencia entre el PSOE y el PP de apenas entre 6 y 7 puntos a favor del primero, cuando tradicionalmente la diferencia mínima había sido de 17.